

Los españoles siempre tuvieron a gloria el mantener en su patria desde hace casi 1400 años la unidad religiosa católica. Así ha sido, en efecto, desde que la juró Recaredo en el III Concilio de Toledo, año 589, hasta la Ley todavía cercana de 1968 (consecuencia del Concilio Vaticano II) y, más propiamente, hasta la vigente Constitución laica de 1978, con la sola excepción de los cinco años de la 2ª República.

El Rey y las leyes reconocieron siempre a la religión católica como religión oficial, y los cultos públicos, la enseñanza y las costumbres se regularon dentro de los supuestos básicos de la fe católica.

A quienes afirmamos hoy que es prácticamente necesario y moralmente obligatorio restablecer en España la confesionalidad del Estado y la unidad religiosa se nos suelen oponer dos objeciones aparentemente de peso:

1ª) Que si, de hecho, no existe ya la unidad católica en España, una gran parte de la población es ajena a toda práctica religiosa, sea por indiferencia, sea por adhesión al marxismo ateo, sea por agnosticismo, sea por la propaganda reciente de otras religiones.

2ª) Que la propia Iglesia en la Declaración *Dignitatis humanae* del Concilio Vaticano II ha decretado la libertad religiosa en el fuero exterior, y presionado sobre los gobiernos católicos para que la establezcan finalmente.

Para responder a estas objeciones es preciso aclarar previamente qué entendemos por unidad religiosa.

La unidad religiosa y la confesionalidad del Estado no suponen imponer a nadie una confesión religiosa ni menos, su práctica. Ni siquiera prohibir el culto privado de otras religiones. Supone sí que las leyes se atendrían a una moral inmutable cuyo cimiento religioso se hallará en los Mandamientos de la Ley de Dios. Y que el Estado profesará y protegerá la religión católica como única exteriorizable públicamente.

El que los católicos profesen su fe no sólo en su vida privada sino en la pública es para ellos un deber moral: su sociedad, sus instituciones y sus leyes deben ser católicas. Pero esto es, además de un deber, una necesidad práctica: si la vida social y las leyes dejan de apoyarse en unos principios inmutables para convertirse en opinión y sufragio, todo queda sometido a discusión, y el desorden moral y civil crece hasta hacerse incontenibles. Como aconteció a los romanos en su última

161
decadencia, llega un momento en que la sociedad no soporta ni sus males ni sus remedios.

Aclarado esto, nos cumple responder a aquellas dos objeciones.

A la primera:

Cuando decimos que el pueblo español sigue siendo, no sólo histórica, sino básica y visceralmente católico, no ignoramos el gran proceso de descristianización que ha sufrido de un siglo a esta parte, ni cómo hoy ese proceso se ve ampliamente fomentado. No obstante lo cual:

a) Ninguna otra religión se ha alzado jamás en nuestro suelo desde tiempos de Recaredo ni ha obtenido más que adhesiones de localización mínima y pasajera. Tampoco ha brotado de nuestro suelo ninguna otra religión ni aun una herejía, por más que algunas de éstas hayan encontrado cierto eco.

b) Si en una hipótesis, un inmenso cataclismo (un terremoto generalizado, una guerra atómica, por ejemplos) se abatiera sobre nuestro suelo, el 80 % de sus habitantes recurrirían al Cielo bajo el nombre de Cristo y de su Santísima Madre. Y el 20 % restante lo haría cuando el peligro fuera para ellos inminente. Nadie, por supuesto, invocaría a otro Dios ni bajo otros nombres y casi ninguno moriría sin esa invocación. Por más que esta reacción respondiera en muchos al miedo, no deja por eso de revelar la mentalidad religiosa profunda de la totalidad de la población.

Caso distinto sería si estos hechos no fueran ciertos y coexistieran entre nosotros varias confesiones, como en países del centro de Europa. En tal caso la prudencia política del gobernante exigiría una libertad religiosa dentro de los límites en que esas confesiones convengan entre sí.

A la segunda:

Es cierto que la Declaración *Dignitatis humanae* del Concilio Vaticano II alude más o menos claramente a la libertad religiosa, y también que el sector progresista dominante en la Iglesia ha forzado esa declaración hasta procurar el desmantelamiento de la unidad católica y de la confesionalidad del Estado en los países en que existían.

Sin embargo, ese Concilio se declaró a sí mismo como meramente "pastoral" y "no dogmático". Y su doctrina se opone en este punto a la de todos los Concilios anteriores (éstos sí dogmáticos) y a todas las encíclicas papales (algunas también dogmáticas). Y si se trata, en efecto, de "pastoral", los frutos de la misma son tan patentes que puede aplicarse a ella la norma de juicio que el mismo Cristo nos enseñó: **por sus frutos los conoceréis.**

¿Quiere esto decir —arguirá alguien— que esa restauración de la unidad católica habría de hacerse contra el gusto y la opinión de los propios pastores progresistas de la Iglesia?

Por supuesto; y también con su exilio si necesario fuere (que no lo sería...).

RAFAEL GAMBRA